

# AGRESIONES CONTRA PERIODISTAS Y MEDIOS EN MÉXICO

ENERO-SEPTIEMBRE  
2012

The logo for Article 19 is a red, stylized shape resembling a folded piece of paper or a flag, with the text "ARTICLE 19" in white.

ARTICLE 19

México ha pasado por un periodo de intensa actividad política. La sociedad vivió un proceso de varios meses al final de los cuales fue electo un nuevo presidente de la República y se renovó el total de las cámaras de Diputados y Senadores. Como podía anticiparse, se presentaron fenómenos propios de la transición, un reacomodo de grupos políticos y sociales que incluyen a las organizaciones delictivas que operan en el país y que colocan sobre la mesa varios desafíos para la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad.

Hasta el 30 de septiembre de 2011, hace un año exactamente, ARTICLE 19 había registrado un total de 140 agresiones contra periodistas, trabajadores de los medios e instalaciones de empresas de comunicación. Pese al contexto descrito arriba, hoy el número es marginalmente más bajo, aunque es definitivo que continúan ahondándose problemáticas severas, particularmente el alto porcentaje en el que los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno son responsables de acciones contra la prensa y el alto nivel de violencia de parte de la delincuencia organizada..

| <b>Tipo de agresión</b>          | <b>Agresiones</b> |
|----------------------------------|-------------------|
| Física/material                  | 62                |
| Intimidación/presión             | 22                |
| Amenazas                         | 16                |
| Desplazamiento forzoso           | 13                |
| Asesinato                        | 6                 |
| Detención ilegal                 | 6                 |
| Privación ilegal de la libertad  | 6                 |
| Ataques cibernéticos             | 5                 |
| Acción legal/calumnia/difamación | 1                 |
| <b>Total</b>                     | <b>137</b>        |
| Fuente: ARTICLE 19               |                   |

Los ataques a la libertad de expresión se han extendido ya a 22 diferentes estados de la República y 45.25% de ellos involucra algún tipo de violencia que compromete la vida e integridad física de los periodistas, o bien involucra el despojo o robo del equipo de reporteros y periodistas gráficos, daños al mismo y la pérdida de material

periodístico e imágenes. Hasta el momento, hemos registrado y documentado el asesinato de seis informadores por razones presumiblemente vinculadas con su ejercicio periodístico; ocho medios han sido objetos de atentados violentos.

Seis entidades, Veracruz (con 24 casos), Oaxaca (20), Baja California (16), Distrito Federal (11), Tamaulipas (10) y Sonora (10) concentran el 66.42% de los agravios contra comunicadores y medios, pero esta vez hay que advertir una regionalización en las características de la violencia que atiende a varios factores.

En el norte del país, Nuevo León y Tamaulipas específicamente, la violencia originada por la disputa entre organizaciones delictivas y de éstas a su vez contra fuerzas federales ha dejado en medio a la prensa. Los atentados con armas y explosivos, además de los ataques incendiarios que se han registrado en ambas entidades tienen en común que han sido dirigidos particularmente contra al menos un par de empresas con prestigio y con medios fuertes (*El Norte* y *El Mañana*).

Entre el 10 y el 29 de julio de 2012 hombres armados atacaron tres oficinas del diario *El Norte*, en la zona metropolitana de Monterrey, las cuales se sumaron a otros tres ataques contra instalaciones de esa empresa realizados en septiembre de 2010, enero y marzo de 2011, para un total de nueve atentados contra medios de Nuevo León desde enero de 2009.

En Tamaulipas no han cesado tampoco las presiones sobre los medios, las amenazas, las compras masivas de ejemplares. El silencio sigue imponiéndose como política editorial ante sucesos que impactan la entidad; la reciente captura y presentación pública de Jorge Eduardo Costilla, el líder máximo del Cártel del Golfo, una de las organizaciones delictivas más importantes en el país, muestra con claridad el fenómeno del cual hablamos. Con excepción de *El Mañana*, ninguno de los principales diarios de la entidad destacó en portada la nota; la mayoría de ellos tampoco la llevó en páginas interiores; la detención de *El Coss* simplemente no sucedió para numerosos medios regionales.

| Estado           | Número de agresiones |
|------------------|----------------------|
| Veracruz         | 24                   |
| Oaxaca           | 20                   |
| Baja California  | 16                   |
| Distrito Federal | 11                   |
| Tamaulipas       | 10                   |
| Sonora           | 10                   |

|                  |     |
|------------------|-----|
| Chihuahua        | 8   |
| Quintana Roo     | 5   |
| Sinaloa          | 4   |
| Puebla           | 4   |
| Morelos          | 4   |
| Nuevo León       | 3   |
| Campeche         | 3   |
| Colima           | 2   |
| Durango          | 2   |
| Guanajuato       | 2   |
| Guerrero         | 2   |
| Hidalgo          | 2   |
| Coahuila         | 2   |
| Michoacán        | 1   |
| Jalisco          | 1   |
| Estado de México | 1   |
| Total            | 137 |

En Veracruz, vecino sureño del estado de Tamaulipas con el cual comparte problemáticas como la violencia y la infiltración de cuerpos policiacos por parte de la delincuencia organizada, fue posible advertir el férreo control sobre la información difundida por los medios con un claro propósito de privilegiar la versión gubernamental de cara al proceso electoral del 1 de julio pasado.

Después de los crímenes de cinco informadores y los rumores difundidos por fuentes no identificadas dentro del gobierno estatal para sembrar la idea de la existencia de una “narcolista” con nombres de “periodistas de alto riesgo”, informadores de Xalapa, Boca del Río y el Puerto de Veracruz enfrentaron fuertes presiones de los grupos de poder en el estado que obligaron a varios de ellos a dejar de manera temporal o definitiva su lugar de residencia.

Periodistas de distintos medios consultados por ARTICLE 19 coinciden en que la relación con el gobierno estatal ha sido sumamente complicada desde la llegada de Javier Duarte a la administración y la designación de Gina Domínguez a la Coordinación General de Comunicación Social. Existe un excesivo control del gobierno estatal sobre la información que circula en los medios, particularmente la que tiene que ver con temas de seguridad pública y delincuencia organizada, la cual frecuentemente es confirmada desde fuera del estado, pues las instancias correspondientes la niegan sistemáticamente.

El medio periodístico veracruzano continúa sometido a presiones vía publicidad oficial mientras los reporteros y fotógrafos trabajan por sueldos sumamente

castigados. Ante esa realidad, los periodistas que abordan los temas locales desde la investigación y el contexto, lo cual representa una perspectiva diferente a la cobertura de sucesos policiacos y reproducción de boletines de las dependencias oficiales, se volvió por demás incómodo. A ellos estuvieron dirigidas las presiones.

En agosto pasado, a través de un comunicado, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz dio por esclarecidos los crímenes de cuatro periodistas y a su vez dio carpetazo a la peor crisis de violencia contra la prensa de la entidad, al atribuirle la aceptación plena de los homicidios a un grupo de personas detenidas en días previos y a las que no se les había dictado siquiera auto de formal prisión. Igual de significativa fue la criminalización de las víctimas por parte del procurador estatal Amadeo Flores Espinosa, quien afirmó que “estos reporteros a su vez habían sido los causantes de la muerte de otros periodistas, asesinados por la organización delictiva autodenominada Los Zetas”. También su antecesor había recurrido a la descalificación a priori de otros comunicadores, asesinados durante 2011.

Al sur, Oaxaca ha sido escenario de la violencia político-electoral que comúnmente marca la agenda informativa en la entidad; las protestas de grupos sociales y los conflictos sociales no resueltos contribuyen a crear un clima hostil contra los reporteros y fotógrafos que les dan cobertura. Como se establece en la Declaración conjunta sobre Delitos contra la Libertad de Expresión, firmada el 25 de junio de este año por varios mecanismos internacionales para la promoción de la libertad de expresión, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para prevenir agresiones a la libertad de expresión en situaciones en que las autoridades sepan o deberían estar al tanto de la existencia de un riesgo real e inminente, y no únicamente en casos en que las personas en riesgo soliciten protección del Estado.

En ese sentido, la problemática no ha sido atendida de manera adecuada por las autoridades de Oaxaca, indolentes en escenarios de riesgo para los trabajadores de los medios, y omisas cuando en presencia de cuerpos policiacos los periodistas son agredidos por grupos sociales y políticos. Esto, al margen de los casos en que las fuerzas del orden perpetran los abusos.

| <b>Agresor</b>              | <b>Casos</b> | <b>%</b> |
|-----------------------------|--------------|----------|
| Funcionarios públicos       | 57           | 41.60    |
| Delincuencia organizada     | 25           | 18.24    |
| Se desconoce/No determinado | 22           | 16.05    |
| Particulares                | 15           | 10.94    |
| Fuerzas partidistas         | 11           | 8.02     |
| Organizaciones              | 7            | 5.10     |

| <b>Agresor</b>     | <b>Casos</b> | <b>%</b> |
|--------------------|--------------|----------|
| sociales           |              |          |
| Fuente: ARTICLE 19 |              |          |

Una constante clara en los últimos años es el alto porcentaje en el que funcionarios públicos aparecen como agresores de la prensa. Autoridades de los tres niveles de gobierno han sido responsables de más del doble de ataques a la libertad de expresión que los que se atribuyen a la delincuencia organizada. Cuatro de cada 10 abusos cometidos por funcionarios contra la prensa son autoría de elementos de las policías municipales.

Mecanismos internacionales coinciden en que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para prevenir delitos contra la libertad de expresión en situaciones específicas en que las autoridades sepan o en las que exista sospecha fundada de la existencia de un riesgo real e inminente de que se produzcan tales delitos, y no únicamente en casos en que las personas en riesgo soliciten protección.

En los últimos meses, ARTICLE 19 ha advertido excesiva lentitud o una nula intervención de los cuerpos de seguridad pública para frenar las agresiones contra periodistas, además de responsabilidad directa en algunas de ellas, favoreciendo un entorno hostil contra los comunicadores, cuando su obligación sería la de garantizar la libre expresión y el derecho a la información.

Los grupos de la delincuencia organizada no han renunciado a su pretensión de usar los medios para difundir mensajes propagandísticos. Aunque sólo un medio nacional decidió hacerlo público, el pasado 22 de agosto, personeros de un grupo delictivo se acercaron a la redacción de diarios, incluso en la capital del país, para entregar un video con la declaración de uno de sus líderes, quien proponía abiertamente pactos a las autoridades y alianzas a otras organizaciones dedicadas al narcotráfico. Tras valorar el contenido y determinar que se trataba de un manifiesto y no de información periodística, la mayoría de las empresas periodísticas decidió no difundir el mensaje.

Ciudad de México, 1 de octubre de 2012

# 2012 AGRESIONES A PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN MÉXICO

Del 1 de enero al 1 de octubre se tiene registro de **137** agresiones de diverso tipo contra la libertad de expresión de medios y personas dedicadas al periodismo.

